

Cali: Narcotráfico, poder y violencia

Boris Salazar Trujillo

No. 163

<http://socioeconomia.univalle.edu.co/index.php/documentos-de-trabajo>

CIDSE

Documento de trabajo No. 163

Junio 2015

ISSN 0122-5944

Universidad del Valle

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Apartado Aéreo 25360

Teléfonos: 331 5200 y 321 2346

FAX: 331 5200

Email: cidse@correounivalle.edu.co

Cali, Colombia

Cali: Narcotráfico, poder y violencia

Boris Salazar Trujillo

Cali: Narcotráfico, poder y violencia¹

Boris Salazar Trujillo²

Resumen

Este ensayo sugiere que la estabilidad de la violencia letal de los últimos veinte años en Cali es el resultado de la interacción de los remanentes del sistema de seguridad de los grandes señores del narcotráfico de los años 1980, con la renuncia de las elites locales a la dirección de la seguridad ciudadana, los negocios ilegales y legales, y la reconfiguración de la ciudad inducida por la guerra irregular, el influjo de desterrados y la transformación del narcotráfico y la protección extorsiva en actividades locales que afectan a los más pobres.

Palabras clave: seguridad, violencia letal, narcotráfico, políticas públicas, poder

JEL N46, N96, D74

Abstract

This essay argues that the stability of lethal violence in Cali in the last two decades is the effect of the interaction between the remains of narco-trafficking landlords' security system from the 1980s with the local elites' renunciation to effectively provide urban security, legal and illegal business, and the reconfiguration of the city induced by irregular war, the influx of displaced people, and the transformation of drug-trafficking and illegal protection into local activities affecting its poorest inhabitants.

Key words: security, lethal violence, drug-trafficking, public policies, power

JEL N46, N96, D74

¹ El autor agradece las muy provechosas conversaciones con Jesús Darío González y Gildardo Vanegas, y los comentarios y observaciones de María del Pilar Castillo, María Isabel Caicedo y Marlyn Vargas a una versión anterior de este ensayo.

² Profesor, Departamento de Economía, Universidad del Valle.

Introducción

¿Cómo dejó Cali de ser la ciudad apacible, compacta y cívica de los años 1970 para convertirse en la cuarta ciudad más violenta del mundo en 2013? No se trata de un año en particular ni de una erupción aislada de violencia homicida, sino de un fenómeno estable, que año tras año, durante las últimas dos décadas, ha generado 1800 homicidios anuales en promedio. Tanta estabilidad en una ciudad en la que todo cambia con rapidez asombrosa, y en la que imperios enteros se desmoronan en segundos a la vista de todos, exige una explicación. Es lo que intenta hacer este ensayo: encontrar los mecanismos que han hecho posible la terrible estabilidad de la violencia letal en Cali en los últimos veinte años.

No es un ensayo histórico. No ha estudiado la gigantesca documentación existente y no siempre disponible. Ni siquiera pretende trazar las líneas gruesas para una posible historia de la ciudad desde 1970. Tampoco ha intentado encontrar la causalidad económica que podría subyacer a los eventos ocurridos. Sus objetivos son más específicos y modestos. Intenta pensar la evolución de la violencia de Cali, en las últimas cuatro décadas, en clave de poder, violencia y narcotráfico. Sugiere que la violencia estable de las dos últimas décadas es el resultado de la evolución espontánea de los remanentes del sistema de seguridad con el que los señores del narcotráfico —los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santacruz y Pacho Herrera— subsidiaron a la elite caleña, y a la ciudad toda, desde finales de los años 1970 hasta la primera mitad de los 1990.

La acción de los señores fue racional, y hasta cierto punto inevitable. Dueños de una liquidez excesiva, derivada de un negocio ilegal que los hacía blanco predilecto de depredadores, colegas y autoridades, los señores optaron por tomar la seguridad de los caleños como si fuera la suya propia. Lo hicieron basados en una convergencia inmediata de intereses de la que parecía emerger una situación en la que todos ganaban y sólo podían perder los enemigos de los señores y de la ciudad. Es más: lo que debían pagar por la seguridad de todos no era mucho mayor que lo pagado por su propia seguridad.

Parecía un intercambio favorable y poco exigente. Los señores nunca cuestionaron ni el poder del Estado central, ni el orden social de la ciudad, ni el papel dominante de las elites locales. No aspiraron a cargos de elección popular, ni intervinieron en la política local en forma directa, pero sí tuvieron en su nómina a una tercera parte de los parlamentarios del país, y a casi todos los del Valle y de la ciudad. En su momento de mayor influencia contribuyeron a la elección de un presidente de la República y lograron imponer la eliminación de la extradición de nacionales en la Constituyente de 1991. Su proyecto estuvo ligado a lograr el clima más *seguro* y amable para sus negocios, y para su condición de empresarios dominantes de un negocio ilegal que los hacía los hombres más ricos de la región. En un sentido económico estricto trataron de disminuir el riesgo total asociado al narcotráfico a un mínimo factible.

Siempre quisieron integrarse al orden social imperante como empresarios exitosos que soñaban con una ciudad amable, próspera y amplia, fundamentada en una clase media creciente, para la que urbanizaron fracciones significativas del suroccidente, suroriente, occidente y norte de la ciudad. En la realización de su proyecto urbanístico, hicieron negocios o se aliaron con empresarios, constructores, financistas, funcionarios, políticos, notarios, curadores y urbanizadores legales. Dada

la liquidez excesiva de la que gozaban, se convirtieron en los financiadores o prestamistas de última instancia de la ciudad,³ tejiendo una tupida red de conexiones financieras que aun hoy tiene impacto sobre los negocios y la violencia en Cali.

Pero dado el carácter ilegal de su actividad fundamental, y la capacidad de amenaza de organizaciones competidoras, y la guerra contra las drogas dirigida por los Estados Unidos, la situación alcanzada no podía ser estable. El mundo idílico de finales de los años 1970 y principios de los 1980, habría de derrumbarse en un baño de sangre que la ciudad no había conocido antes. La guerra contra Pablo Escobar, primero, y luego la persecución implacable de los Estados Unidos y del Estado colombiano, hicieron que las confrontaciones desatadas superaran de lejos la capacidad del sistema de seguridad construido por los señores. Lo que era una externalidad positiva para la ciudad y la elite tradicional se convirtió de repente en una de signo negativo: por efecto de las guerras libradas por los señores, la ciudad dejó de ser segura y una violencia desordenada se desató de repente llegando a su cúspide en 1994, el año más violento de todos los tiempos en Cali.

El subsidio ofrecido por los señores no fue ni inocuo ni gratis. A cambio de quitarse de encima el peso de su propia seguridad y la de sus conciudadanos, las elites tradicionales renunciaron al control del orden público de la ciudad, y en lugar de la fórmula activa “hacer morir y dejar vivir” (Foucault 2002), que los habría convertido en modernos soberanos absolutos, optaron por “dejar morir” –la fórmula más simple que está detrás de la violencia estable que hemos vivido en los últimos veinte años. Fue una renuncia que dejó en manos de los señores y su sistema de seguridad el poder de hacer morir y dejar vivir que explica el grueso de la violencia ocurrida en Cali desde finales de los años 1980.

Después de la caída de los señores y de su sistema de seguridad, a mediados de los años noventa, emergió el nuevo sistema violento y espontáneo de regulación de la vida social que está detrás de la violencia estable que ha afectado a la ciudad en las dos últimas décadas. En el interim, las elites tradicionales –o lo que queda de ellas– no han dejado de observar la fórmula de “dejar morir”. Dejan morir, o matarse entre ellos, a narcotraficantes, extorsionistas y delincuentes comunes, y controlan, de paso, el crecimiento de la población juvenil de las comunas del oriente y de la ladera, a través de las interacciones violentas entre pandillas, y de la criminalización global de los habitantes de esas comunas. Es una aplicación, a la colombiana, de una práctica estatal generalizada en las grandes ciudades posmodernas: la estigmatización de ciertos territorios y de sus poblaciones (Wacquant et al. 2014) hasta crear una identificación perversa entre *ghetto* y prisión. Algo que ha venido ocurriendo de hecho en los barrios negros de las grandes ciudades de Estados Unidos, y está ocurriendo hoy en Cali:

Aplastantes fuerzas políticas y sociales han rediseñado el “cinturón negro” de mitad de siglo para hacer al *ghetto* más parecido a una prisión; y la “sociedad de los internos” ha sido desgarrada de forma que la prisión sea más parecida a un *ghetto*. (Wacquant 2002, 2, énfasis en el original.)

³ Un antiguo empleado de José Santacruz Londoño afirma que llegaron a poseer más de dos terceras partes de todas las propiedades de la ciudad. (Entrevista 2014) Un antiguo relacionista público de los Rodríguez pone en duda su carácter de prestamistas de última instancia. Desde su perspectiva, los señores sólo invertían en aquellos negocios que consideraban rentables, o estaban dentro del alcance de sus gustos y pasiones personales (el fútbol para Miguel Rodríguez; las carreras de caballos, para Gilberto Rodríguez).

Las interacciones entre la proliferación de pandillas juveniles y el sistema de violencia generado en Cali han sido decisivas para la reproducción del segundo. Desde los tiempos de los señores, los militares, delincuentes y operadores privados que querían pertenecer al aparato de seguridad de los Rodríguez y sus socios debían probar su capacidad y audacia realizando hechos violentos.⁴ Si realizaban su tarea con éxito podían aspirar a un contrato con el sistema de seguridad, si no lo hacían podían olvidarse de él, y resignarse a llevar una vida arriesgada en el bajo mundo de la delincuencia común.

Con el avance de la urbanización de Cali hacia el oriente y la llegada, desde finales del siglo pasado, de cientos de miles de desplazados del Pacífico y del sur del país, las pandillas juveniles se convirtieron en formas colectivas de socialización y supervivencia para los jóvenes que crecían y crecen en esos asentamientos. Los más audaces y decididos, los que muestran en los hechos, capacidades sobresalientes para la violencia letal son contratados por oficinas de cobro y pasan a hacer parte del sistema de violencia.

Es un proceso de selección natural que requiere del ejercicio de la violencia: sólo el que muestra que puede matar, sin mediar provocación alguna y obedeciendo órdenes que vienen desde arriba, puede ser contratado por las organizaciones que controlan la oferta de servicios criminales en la ciudad. Sólo algunos lo logran. No todos, ni siquiera muchos, al contrario de lo que aseguran, con notorio desparpajo, investigadores académicos, medios de comunicación y autoridades estatales.

El ascenso de jóvenes delincuentes promisorios a las oficinas de cobro “cierra” el sistema de violencia que regula la vida social en la ciudad, garantizando su reproducción. Pero no es lo que lo pone en marcha: es la *demand*a por servicios criminales⁵ lo que hace indispensables la formación y contratación de nuevos sicarios profesionales. Y es la maraña de negocios ilegales y legales, de expropiaciones y deudas sin pagar, y de derechos de propiedad sin definir lo que explica una parte no despreciable de la violencia estructural de la ciudad.

Este ensayo busca explorar la forma en que las interacciones entre narcotráfico, negocios y poder ha generado una violencia estable, que actúa como reguladora espontánea de un orden social en el que se mezclan actividades ilegales y legales, y en el que las elites tradicionales renunciaron a la provisión de seguridad ciudadana y al control del orden público. Al dejar que la dimensión política del orden público quedara en manos del Estado central, las elites políticas y sociales, de todos los colores, que han rotado por la administración local indujeron, quizás sin saberlo y sin planearlo, una situación inédita en la que el orden público se convirtió en un problema exclusivamente policivo, lejos del control de las autoridades locales.⁶

⁴ Esta hipótesis fue planteada por primera vez en un manuscrito inédito de Federico Vallejo (2000).

⁵ No hay estudios académicos para Cali del fenómeno de pagar por matar, o de la demanda de servicios criminales. Hay intentos de entender la demanda por servicios criminales en Bogotá, usando el concepto de mercados de criminalidad. (Ávila y Pérez 2011) El estudio que hicieron Arévalo y Guáqueta (2014) se concentra en la hipótesis de que el deterioro de la seguridad en Cali se debe a los cambios en locales, regionales e internacionales en el tráfico de la cocaína, pero no intenta explicar por qué la modalidad de pagar por matar es tan estable en la ciudad, ni cómo se reproduce.

⁶ No ha ocurrido lo mismo en Medellín, la ciudad gemela de Cali en materia de narcotráfico y violencia. Más allá de la evaluación que pueda hacerse de las políticas públicas con respecto a la seguridad ciudadana en

En el pasado el orden público tenía que ver con el control político y policivo de la oposición política, primero, y de las organizaciones de izquierda –armadas y desarmadas—después. Durante La violencia, el Estado local se alió con grupos sicariales para eliminar a liberales, gaitanistas y comunistas (Betancourt 1998), creando una infraestructura criminal, ligada al Estado, que prefiguraba, en ciertos aspectos, lo que habría de ser el sistema de seguridad que luego se impondría en Cali y en el Valle. De hecho, como ha sido documentado en forma extensa [Betancourt 1998, López 2010], sicarios de La violencia pasaron luego a engrosar las organizaciones armadas al servicio de los narcotraficantes del Norte del Valle. Y fueron oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quienes conformaron la base inicial del sistema de seguridad que los señores crearon en Cali.

Es nuestra conjetura que en las múltiples interacciones entre negocios ilegales, protección armada y actividad social, favorecidas por la renuncia de las elites tradicionales al control de la seguridad ciudadana, están las claves para entender por qué la violencia letal se convirtió en una constante de su vida social, por qué las relaciones de poder han llegado a ser tan inestables, y por qué ha sido imposible la consolidación de un proyecto incluyente de ciudad.

La extraña estabilidad de la violencia

He aquí algunos hechos gruesos. En 2013, Cali fue la cuarta ciudad más violenta del mundo, en un momento en el que la violencia letal estaba cayendo en forma sostenida en Colombia y en el mundo, y en la que Medellín –la ciudad gemela de Cali en materia de crimen, negocios ilegales y violencia— regresó a una senda de rápido descenso de la tasa de homicidios. Los pares de Cali en materia de violencia letal son ciudades en estado de desorden agudo, cercano a la catástrofe, como San Pedro Sula, Caracas y Acapulco. (Seguridad, Justicia y Paz 2014) La apreciable caída en el número de homicidios en 2014 no contradice en lo fundamental la tesis que defendemos aquí. Si bien es cierto que en 2014 Cali descendió al noveno lugar en el escalafón mundial de ciudades violentas, tanto la magnitud como la tasa de homicidios siguen siendo muy altas, incluso para Colombia: 1530 homicidios y 65.25 homicidios por cada cien mil habitantes (hcmh). Tan grande que supera en más del doble el número de homicidios de Medellín (657 y 26.91 hcmh respectivamente), la ciudad que solía ser su gemela en materia de violencia y narcotráfico.

Lo curioso es que nadie considera a Cali al borde de una situación catastrófica en materia de seguridad ciudadana. La razón es simple: la violencia letal de Cali ha mostrado una rara estabilidad en los últimos 20 años, después de alcanzar un pico histórico en 1994 –el año en que el mal llamado cartel de Cali iniciaba su camino hacia el colapso. Con tanta estabilidad, la violencia letal se ha convertido en un elemento *estructural* de la vida de la ciudad. Por aun: en un elemento corriente de

Medellín, es evidente que sus elites han intentado recuperar el control de la política de seguridad ciudadana. Nuevas elites políticas tecnocráticas, con un conocimiento más cercano de la violencia urbana, y una mayor valoración de la educación y del urbanismo como estrategias para superar la violencia, lograron caídas significativas, aunque pasajeras, en la tasa de homicidios en Medellín. No es casual que uno de los alcaldes del periodo tecnocrático, Alonso Salazar, haya escrito dos de los libros más importantes sobre la violencia en Medellín: *No nacimos pa' semilla* y *La parábola de Pablo*.

la vida ciudadana. Un fenómeno molesto, pero permanente, con el que hemos aprendido a convivir, producto de la intervención inexplicable de fuerzas extrañas y criminales que elegirían a Cali como el espacio predilecto para sus disputas –como suelen repetir, con variaciones, autoridades y expertos locales.

La estabilidad de la violencia letal revela otro fenómeno preocupante: la *nula* incidencia de la política estatal (nacional y local) sobre la evolución de la violencia en la ciudad. Mientras en Medellín es fácil relacionar los picos y caídas de la tasa de homicidios con la incidencia de la política estatal, en Cali es imposible encontrarla. Es fácil constatar, en cambio, la *inmovilidad* de distintas administraciones municipales frente a la violencia letal y la seguridad ciudadana.

Resulta paradójico que esto ocurra en una ciudad de la que ha sido alcalde dos veces en los últimos veinte años un experto internacional en seguridad pública, Rodrigo Guerrero, y que cuenta con uno de los más sofisticados sistemas⁷ de recolección de información sobre delito y violencia del país y de Sur América. Pero recolección no es equivalente a intervención. Y las dos alcaldías de Guerrero se han caracterizado por una renuncia abierta a enfrentar la violencia organizada, criminal y estructural, y a tratarla como si fuera un problema de intolerancia o de mal comportamiento de ciertos individuos.

La inocuidad de la política estatal está ligada, sin duda, a la ausencia de un proyecto incluyente de ciudad, y hace parte de un proceso de cambio político más profundo: la privatización de la política electoral, y la altísima rotación de parlamentarios, diputados y concejales. Su efecto más evidente ha sido la emergencia de grupos pasajeros de intermediarios, operadores, políticos y contratistas que extraen rentas durante unos años para luego desaparecer sin dejar huella alguna –salvo la corrupción creciente— en materia de política pública.

Por último, la ciudad pequeña, pero compacta, de 1970, se ha convertido en una ciudad de dos millones y medio de habitantes dividida –por profundas líneas de segregación— en dos ciudades: una central y estrecha, que va de sur a norte y concentra la mayor parte de los servicios, el comercio, el intercambio y la riqueza, y una ciudad en expansión hacia el oriente y hacia las laderas, que concentra la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades y habilitaciones. La segunda ciudad no ha dejado de crecer en las últimas dos décadas, impulsada por la inmigración de desterrados de la guerra irregular librada en el Sur y en el Pacífico.

La nueva ciudad

A finales de los años 1970 y durante los años 1980 el destino de la ciudad cambió de manos. Hasta la década anterior las viejas elites, ligadas a la industria y a la tierra, habían dirigido el destino de la ciudad, llegando a su punto más alto con los Juegos Panamericanos de 1971, la expansión de la ciudad hacia el sur y el oriente, y el crecimiento vertiginoso de la plusvalía urbana y la especulación

⁷ Es un sistema sin duda sofisticado, elegido como modelo en América Latina, pero con dos graves fallas, hasta ahora no subsanadas: la tendencia a “masajear” o cambiar los datos para que favorezcan las políticas del mandatario de turno, y el carácter secreto que le han dado a un registro público que debería estar abierto a investigadores y ciudadanos.

inmobiliaria. En su análisis de la ciudad moderna que pudo ser y nunca fue, Carlos Botero plantea la evidente conexión entre los Juegos Panamericanos y la especulación urbana como modelo de urbanismo:

Aunque la operación cumplió con los objetivos deportivos, promocionales, políticos y económicos privados, particularmente aquellos a favor de una expansión deliberada del perímetro urbano que enriqueció más que nunca a los terratenientes urbanos, tanto la forma urbana construida como la imagen de la ciudad quedaron definitivamente desdibujadas y la ciudad fraccionada. (Botero 2000, 26)

El proyecto urbano de las elites tradicionales estaba centrado en el deporte y el civismo como valores ciudadanos, en el paternalismo católico como forma de integrar a los pobres, y en el crecimiento de la plusvalía urbana vía la expansión de la ciudad hacia su periferia. Los pobres tenían un papel fundamental: su localización en la periferia de la ciudad garantizaba la valorización de las tierras y de las propiedades del interior.

Fue una localización política: jefes políticos, operadores inmobiliarios, manzanillos, líderes barriales, y urbanizadores se unieron para ofrecer el sueño de una vivienda propia en una frontera urbana siempre en expansión. Los que llegaban, expulsados por la violencia tradicional, recibían la protección inmediata de políticos y urbanizadores en busca de votos, dinero y poder. El intercambio era perfecto: los desterrados ponían sus votos y su lealtad a cambio de recibir un pedazo de tierra para construir el sueño de la casa propia en la ciudad más cívica de Colombia. José Darío Sáenz (2012, 321) encontró que entre 1958 y 1998, el Concejo Municipal de la ciudad creó y legalizó 121 barrios. La estrategia seguida por políticos, intermediarios, terratenientes y urbanizadores seguía dos etapas bien diferenciadas: en la primera, los terrenos eran invadidos por pobladores asesorados por activistas políticos, y en la segunda

Los miembros de la elite política o sus cuadros políticos se encargaban de adelantar el proceso de legalización desde el Concejo Municipal. (Ídem.)

Pero ese intercambio tan perfecto nunca lo fue del todo. Los desterrados, unidos a políticos comunistas y activistas liberales, también lucharon por la vivienda en forma independiente, creando barrios que no estaban bajo la protección de los partidos tradicionales. De hecho, fueron ellos quienes iniciaron los procesos de ocupación de terrenos y construcción de barrios que luego fueron cooptados por las elites locales.

El desalojo violento, usando las fuerzas militares y policivas, fue la respuesta automática del Estado local a la primera oleada de ocupación de terrenos por parte de desterrados y destechados. Urbano Campo (1977), a partir de datos de la prensa local, cita algunos de los desalojos violentos y de las tomas de tierra urbana ocurridas en Cali en el periodo 1959-1973:

En agosto de 1959, 400 personas fueron desalojadas en Cali. En noviembre del mismo año, 1174 familias fueron desalojadas 2, del barrio La Floresta de Cali. En agosto de 1962, 2000 familias ocuparon unos terrenos en un sitio no precisado de la ciudad. En agosto de 1963 ocurrió un desalojo violento en el Barrio El Rodeo. En febrero de 1965, las fuerzas militares desalojaron en forma violenta a los pobladores que habían ocupado los terrenos Asturias. En marzo de 1973, la policía destruyó varias casas en el barrio Terrón Colorado, en las laderas del noroeste de la ciudad. En junio de 1974, las fuerzas policivas expulsan a pobladores del barrio Belén. (Campo 1977, 133-4)

Como lo caracterizó el mismo autor⁸, tanto en Cali, como en otras ciudades de Colombia, estaba ocurriendo una verdadera “guerra urbana”, que no era más que la transferencia de la guerra que había desterrado a centenares de miles de campesinos a las ciudades:

Quizás el fenómeno más sobresaliente en el panorama de la historia moderna del país reside en la transferencia reciente y decisiva de las luchas agrarias hacia la ciudad y la conversión de la guerra por la tierra en combate por el lote. (Campo, Op. cit., 128-9)

La historia de la creación del barrio Terrón Colorado da una idea del tipo de relaciones existentes entre las elites tradicionales y los desterrados que buscaban un lugar en la ciudad. Hacia 1947 los antiguos trabajadores de la carretera al mar decidieron “usar las zonas de reserva de la carretera al no encontrar otras posibilidades de acceder a una vivienda en la ciudad”. (Ortiz 2012) La respuesta del gobierno local fue formar una guardia policiva especializada en la destrucción de las viviendas de los pobladores y en vigilancia de los terrenos destinados para otros usos. El artífice de esa política de mano dura fue el alcalde Álvaro Lloreda, cabeza de una de las familias conservadoras con más influencia sobre la política, la industria y el desarrollo urbano de la ciudad, caracterizado en una historia de los barrios de la ciudad como “enemigo violento y acérrimo” (Op. cit., 102) de los ocupantes, quien además de crear la guardia mencionada, nombró a un inspector permanente para tumbar los ranchos construidos e impedir la consolidación de las nuevas viviendas.

La confrontación política entre gaitanistas y conservadores se extendía al campo de la ocupación del suelo y de la vivienda: Humberto Mazuera Jordán, líder gaitanista y personero municipal, entregó permisos para la construcción de vivienda en la zona y legalizó la propiedad de algunos de los terrenos ocupados por los pobladores. Un año después, Mazuera sería uno de los líderes de la revuelta del 9 de abril contra el gobierno conservador, y presidente de la junta revolucionaria que ocupó el Palacio de la gobernación por unas horas hasta ser detenidos por el ejército y enviados a Pasto. (Betancourt 1998)

Lo que hoy se conoce como la comuna 7 fue urbanizada sobre terrenos de la hacienda El Guabito, propiedad del ganadero y terrateniente Abraham Domínguez Vásquez. En 1958 organizados por la Central Provivienda –de filiación comunista y liderada por Alfonso Barberena⁹– ocuparon terrenos de la hacienda El Guabito que no tenían las condiciones urbanas y sanitarias para la habitación humana. (Ortiz 2010, 71) La presión de los afiliados a la Central obligó a los antiguos dueños a vender sus propiedades, hasta que en 1960 se protocolizó la compra del terreno y los pobladores iniciaron las tareas de desmonte, urbanización y construcción de lo que habrían de ser las tres primeras etapas del barrio y Alfonso López, y más tarde los barrios Siete de Agosto, Andrés Sanín, Los Pinos y otros. (Junta Los Pinos Web Node) Sólo la lucha organizada de los pobladores urbanos, liderados por activistas comunistas y liberales, hizo posible la urbanización de esa zona del nororiente de Cali.

⁸ Urbano Campo era el pseudónimo de Jacques Aprile-Gnisset, uno de los investigadores más importantes de los procesos de urbanización de Colombia.

⁹ El otro gran líder histórico de la lucha por la vivienda en Cali fue el sastre comunista Julio Rincón, cuyo nombre lleva uno de los barrios del oriente de Cali.

Nicolás Buenaventura cuenta la estrategia, siguiendo el criterio de que adelante iba quién tenía menos que perder, elegida por los destechados para ocupar los terrenos que más tarde se convertirían en barrios:

Nosotros hacíamos las invasiones metódicamente. Adelante iba la brigada de los desarrapados de los que tenían sólo, como enseñaba el Manifiesto, las “cadenas para romper”.

No recuerdo bien, pero creo que una ofensiva en el barrio Asturias de Cali, tuvimos 28 quemas y desalojos por la policía. Pero se aseguró el terreno. Era la vanguardia, el grupo de los escoteros, que tenían una mano atrás y otra adelante. Luego vendrían de relleno los otros, el segundo contingente, ya con la tierra amansada y la marea más tranquila. Vendrían los de las camas, incluso de madera torneada y con volutas, esas de los espejos de enormes marcos. Vendrían las máquinas de moler y de coser, las estufas. (Buenaventura 1992, 113-114).

Con el tiempo, políticos de los partidos tradicionales entraron a competir por el control de la voluntad de los pobladores, intercambiando servicios públicos, pavimentación y empleo por votos, indicando la transición de una ciudad creada a ritmo de guerra urbana hacia una ciudad hecha al son de la protección de políticos, empresarios ilegales y bandas criminales. La historia del desarrollo urbano de los últimos sesenta años siguió patrones similares: desterrados, destechados, activistas, políticos de todos los tipos y terratenientes urbanos, en procesos conflictivos y contradictorios, fueron moviendo hacia fuera el perímetro urbano, ocupando zonas insalubres y difíciles para la supervivencia urbana, y elevando la plusvalía urbana en el interior de la frontera en movimiento.

Hoy, terratenientes urbanos y políticos siguen expandiendo la ciudad hacia los terrenos del antiguo basurero de Navarro y los humedales de la ribera del río Cauca. Son terrenos pantanosos, inundables, inhóspitos, contaminados por lixiviados y elementos de larga biodegradación, pero es allí en donde se están construyendo los nuevos barrios para los más pobres, y en donde se están creando la nueva plusvalía urbana que las elites locales esperan recolectar dentro de muy poco.

La creación de la Cali moderna no fue, pues, el proceso idílico promocionado en la historia oficial. Hizo parte de la transferencia de la guerra agraria –que había dejado más de doscientos mil muertos y millones de desterrados— a las ciudades y de su transformación en una guerra por la supervivencia en un contexto de lucha política por el territorio urbano, la configuración de la ciudad y la apropiación de la plusvalía urbana.

Una transferencia que regresó, a mayor escala y con un rango geográfico más amplio, a finales del siglo pasado y en la primera década del presente, con el arribo de cientos de miles de desterrados de la costa Pacífica vallecaucana, Chocó, Nariño, Putumayo, Cauca y el resto del Valle del Cauca, que terminaron asentándose en los terrenos más orientales de la ciudad y en la ladera occidental.

Entre los dos procesos no hay sólo diferencias de escala. Es cierto que la mayor escala de la guerra y del despojo de la última guerra, ocurridos en los territorios periféricos de la nación, y la mayor dureza de la lucha por la supervivencia en los barrios del extremo oriente y de la ladera, han tenido un efecto sobre la ciudad en la que deben sobrevivir los desterrados recientes. Y que la ciudad que hoy crece en las periferias no es similar a la ciudad que crearon los desterrados de años 1950, 1960 y 1970. Pero lo que los separa con mayor claridad es el ascenso del crimen organizado y de la

violencia como formas de protección política y la consecuente reducción de la resistencia popular en el proceso reciente de formación de la ciudad.

No ha dejado de haber manzanillos, políticos, operadores inmobiliarios y especuladores, que ahora disfrutan de la compañía del Estado central como creador de engendros urbanos como Potrero Grande. Tampoco ha desaparecido la intermediación de los políticos que intercambian votos por la ilusión de un lote en alguna invasión o urbanización pirata. Y tampoco el Estado local ha dejado de jugar al paternalismo y a los programas de integración empresarial para los habitantes de las nuevas márgenes urbanas.

Pero lo que sí ha cambiado es el papel creciente de la protección violenta y criminal en la conformación del orden urbano y la virtual desaparición de las luchas populares en los territorios en formación. Los habitantes del extremo oriente y de la ladera están sometidos a un orden inestable, en el que la efectividad de los distintos aspirantes al control territorial determina su éxito cambiante en función del estado de la confrontación entre ellos. Es la fuerza armada de cada uno de ellos y su capacidad relativa para extraer tributos, ejercer la extorsión y decidir quién vive y quién muere en sus territorios lo que determina la estabilidad de su control territorial.

Cali: ¿ciudad-Estado?

¿Cómo ocurrió un cambio tan radical en tan pocos años? Conjeturamos que es imposible explicar y entender lo que ha ocurrido en Cali en los últimos cuarenta años, y su situación de hoy, sin tener en cuenta la evolución de las interacciones entre negocios ilegales, violencia letal y poder político a lo largo de ese periodo. El desplazamiento de los políticos tradicionales, y sus partidos, y su sustitución por intermediarios y operadores de duración muy limitada, agrupados alrededor de intereses privados, no es un simple episodio de relevo generacional. Es el reflejo de una profunda transformación en las relaciones de poder que reemplazó a las fuerzas oligárquicas tradicionales – ligadas a la tierra y la industria— por núcleos de aspirantes vinculados al narcotráfico en forma directa, o indirecta que aprovecharon el vacío dejado por los partidos y elites tradicionales.

Fue un proceso de democratización parcial que ocurrió en dos escenarios distintos y simultáneos. Por un lado, permitió el acceso a la política electoral de personas y fuerzas que habían estado excluidas del ejercicio del poder político visible. Y del otro, llevó a la expansión silenciosa, sólo visible en sus efectos más notorios, de un nuevo poder que determinaba quién vivía y quién moría en la ciudad, quién podía hacer negocios y quién no.

La emergencia de ese nuevo poder sobre la vida y la muerte implicó el paso de la seguridad ciudadana de las manos del Estado a las de quienes tenían los medios para detentar poder tan terrible. Como ocurrió en Medellín en los años ochenta y noventa y en la primera década de este siglo, Cali se convirtió en una especie de *Ciudad-Estado* independiente, cuya seguridad no dependía del Estado central, ni de las autoridades locales, sino de la capacidad operativa de sus aparatos de protección armada y de las redes de información y apoyo que penetraban toda la sociedad, uniendo narcotraficantes, agentes del Estado, comerciantes, banqueros, nuevas elites locales y ciudadanos del montón. En la década de los años 1980 y en los primeros años de los 1990, del siglo pasado, la

seguridad de los Rodríguez y sus aliados se convirtió en la seguridad de Cali y la autoridad del Estado pasó a manos de la Ciudad-Estado que emergía desde las sombras.

Lo que no es equivalente a decir que las relaciones con el Estado central desaparecieron. En realidad, los jefes del narcotráfico construyeron una intrincada red de relaciones con políticos locales y nacionales, periodistas, intermediarios y funcionarios públicos que les ayudó a mantener unos lazos cambiantes que fluctuaban entre el patronazgo directo, el intercambio de favores, la financiación y la construcción de consensos nacionales alrededor de temas decisivos de la agenda de los narcotraficantes. El control estricto que mantenían sobre los asuntos locales era completado de esta forma por las múltiples relaciones que mantenían con la capital y con el poder estatal y financiero del país. (Giraldo 2005)

Los jefes de Cali veían, entonces, a los políticos profesionales como intermediarios indispensables con el Estado central. No eran decisivos para asegurar y mantener su control sobre la ciudad –algo que ya habían conseguido por sus propios medios— pero sí para lograr decisiones favorables con respecto a asuntos legales y constitucionales que afectaran sus intereses. Por supuesto, la mayor parte de los políticos locales estaban en su nómina, pero no eran fundamentales para ejercer su dominación en la ciudad. (Chaparro 2005)

El relato admirado que hace Alberto Giraldo (Giraldo 2005) de la forma en que Gilberto Rodríguez se acercó a banqueros, financistas, industriales, políticos, dueños de medios de comunicación, grandes agricultores y comerciantes, sugiere la claridad de metas de los líderes del narcotráfico caleño. La compra de Corporación Financiera de Boyacá, del Interamerican First Bank, del Banco de los Trabajadores, de la representación de Chrysler en Colombia, de las distintas emisoras independientes y locales que conformaron más tarde el Grupo Radial Colombiano, indican no sólo una voluntad de legitimación, sino una muy clara estrategia de integración a los poderes económicos, financieros y políticos indispensables para convertirse en empresarios legítimos, influyentes y poderosos. (Giraldo, *Op. cit.*, 181-185)

La red de relaciones económicas, financieras y políticas tejida por Gilberto Rodríguez era lo más cercano a un entramado ideal para la creación de un grupo financiero legítimo fundamentado sobre dineros ilegales. El cierre ideal fue la cooptación de los políticos nacionales que habrían de aprobar la no extradición de nacionales y que no dejaron de manifestar su simpatía por la causa de señores tan generosos hasta que la guerra global contra las drogas cambió todo para siempre. El relato de Giraldo suena como una versión colombiana de las narraciones que Balzac hiciera de los ricos de provincia que construían poco a poco, y con muchos sinsabores, su entrada en el mundo del capital y de la capital.

Con una diferencia: sobre los nuevos ricos de Cali pesaba la pesada mano de los Estados Unidos y su política anti-drogas, que convirtió su destino en una tragedia y llevó a la rápida caída de su imperio. Lo que habría podido ser un drama nacional, solucionable dentro de marcos locales, se convirtió en un fenómeno global y supranacional que impuso unas nuevas reglas del juego legal.

El control sobre las finanzas locales era más simple y tuvo unos efectos duraderos sobre lo que habría de ser la ciudad en las últimas décadas. Dueños de fortunas impensables para sus

competidores, los Rodríguez, Pacho Herrera y Chepe Santacruz hicieron lo que hacen todos lo que tienen excesos de liquidez en momentos de crecimiento económico: financiaron proyectos de inversión de industriales, urbanizadores y constructores locales, compraron terrenos y propiedades y produjeron por su cuenta una buena parte del *boom* inmobiliario que vivió Cali en los ochenta y en la primera mitad de los noventa.

El mismo Giraldo da una idea del papel de los Rodríguez como financiadores de la Cali, que estaba surgiendo en los ochenta sobre las ruinas de la Cali que los propios señores añoraban:

Los hermanos Rodríguez fueron factores determinantes en el desarrollo económico. Toda empresa importante que aparecía iba dónde ellos y generalmente obtenía financiación. Cuando en Cali comenzaba una construcción de una unidad residencial, un centro comercial, o un buen edificio, los Rodríguez estaban ahí y aportaban el 25% porque tenían demasiada liquidez. Ellos participaron en todos los proyectos grandes; estuvieron en lo de Chipichape, que hoy es un gran centro comercial. (Ibíd., 147)

La afición tan colombiana por los caballos de competencia permitió que tejieran lazos con lo más tradicional de la elite caleña:

Gilberto solamente se interesó en un negocio, que fue el del Hipódromo de Cali, en donde fue socio con el doctor Adolfo Blum, padre de la senadora Claudia Blum. Para este negocio, incluso, alcanzaron a importar una tropilla de 200 caballos desde Argentina, para el hipódromo que iba a ser el más moderno de América Latina; los industriales, con excepción de los Lloreda y los Carvajal, acudían a ellos en busca de préstamos que pagaban normalmente. (Ídem.)

Las mesas de dinero –que cubrían la falta de una verdadera bolsa de valores– también fueron creadas, alimentadas y administradas por los Rodríguez y sus asociados:

De hecho, ellos constituyeron una mesa de dinero muy grande, muy grande. Hasta el año 94 todas las mesas de dinero, a través de los bancos o de La Bolsa, lo que fuera, pero iba la gente y recogía y lograba mucha financiación, en un momento en el que estábamos en el boom de los intereses. Eran prestamistas. Todo el sistema financiero estaba *contaminado* por su dinero. Pacho Herrera había llegado a ser dueño de una de las joyas de la corona financiera del país, la FES. El señor Lora Camacho, que era uno de los hombres más importantes en ese momento, cayó estrepitosamente porque encontraron que la FES tenía 14 mil millones de Pacho, en el año 94. (Ibíd., 147-8, mis cursivas.)

En la práctica los Rodríguez y sus asociados se convirtieron en los prestamistas de última instancia del sistema financiero regional.¹⁰ Los industriales, especuladores, urbanizadores y constructores que requerían capital fresco tuvieron que recurrir a ellos, los únicos con la liquidez suficiente para cubrir la demanda creciente por financiación.

Ni siquiera la guerra entre las organizaciones de narcotraficantes de Cali y Medellín hizo que la bonanza económica de esos tiempos decayera. En cambio, esa guerra sí contribuyó a que las dos se convirtieran en virtuales ciudades-Estado. Pero no lo hicieron de la misma forma. A pesar de las obvias similitudes entre las dos ciudades, Medellín tomó un camino distinto al de Cali. Si bien en ambas la destrucción, por parte de los Estados de Colombia y de los Estados Unidos, de las grandes

¹⁰ El papel de los señores como prestamistas de última instancia es negado por un antiguo relacionista público de los Rodríguez: para él, los Rodríguez nunca asumieron esa función. (Entrevista 2, 2015)

organizaciones tradicionales de narcotraficantes hace similares a los dos procesos, la transformación de Medellín en una ciudad-Estado no tuvo los mismos resultados de Cali.

Al estudiar la situación de Medellín, después de la aniquilación de Pablo Escobar y de sus hombres a manos de Los Pepes, Forrest Hylton (2008) caracterizó el ascenso de Don Berna al poder absoluto sobre la vida y la muerte en la ciudad como el surgimiento de un para-Estado:

Organizado al estilo de las mafias, el para-Estado ha conducido a una profundización del neoliberalismo por medio del terror político, la coerción extra-económica y la obtención de renta basada en la amenaza y en la violencia. La economía popular de las comunas ha sido incorporada a las redes paramilitares –protección, drogas y armas, transporte, trabajo, comercio lícito, alquiler de vivienda—mientras que el centro de la ciudad se volvió más seguro para los servicios bancarios, de turismo, “cultura”, congresos de negocios, especulación inmobiliaria e inversiones locales y extranjeras. (Hylton 2008, 111)

Por supuesto, es inevitable encontrar en Cali elementos similares a los que Hylton describe en su artículo. La extorsión, el terror y la tributación contra los más pobres también ocurren aquí. Pero hay una diferencia esencial: en la Cali de hoy el sistema de violencia que domina en la ciudad es espontáneo y no cuenta ni con un jefe máximo ni con una repartición negociada del territorio entre las organizaciones más grandes como ocurre en Medellín. El grado de desorden en Cali –medido por el número de organizaciones delincuenciales en pugna, el número de territorios en disputa, y la ausencia de jerarquías— es sin duda mucho mayor.

Los dueños de la ciudad

¿Cómo explicar estos caminos diversos? He aquí una posible explicación, entre muchas otras. Para acercarnos a ella tenemos que volver a finales de los años 70 y comienzos de los 80. La ciudad basada en la especulación urbana y el paternalismo cívico que habían estado diseñando las elites tradicionales choca de repente con la irrupción de las fuerzas económicas asociadas al narcotráfico, que llegaban con una idea de ciudad que si bien coincidía en algunas dimensiones con la que promovían las elites, era distinta en cuanto a sus orígenes, visión y fines. Los nuevos urbanistas no aspiraban a enriquecerse con la especulación urbana. Tampoco querían apropiarse de mayores porciones de plusvalía urbana moviendo la frontera urbana hacia el exterior y urbanizando precariamente las áreas rurales del municipio. Ya tenían dinero suficiente para comprar la ciudad entera, si así lo hubiesen querido.

Sus aspiraciones eran otras. Aspiraban a hacer una ciudad a la medida de sus sueños, y a invertir su excesiva liquidez en negocios rentables y legítimos. No la ciudad perfecta en términos urbanísticos, sino la ciudad en la que les hubiese gustado vivir si tuvieran la posibilidad de hacerla. Y la tenían. Un antiguo empleado de José Santacruz Londoño cuenta que:

Puedo ver a José en el barrio Primero de Mayo, con botas, muy joven y decir: “En la zona de la Cascada voy a hacer una ciudad”, y cuando yo ya tenía la conciencia de ver la ciudad en el barrio La Cascada, toda La Cascada hecha, pararse ahí donde quedaba El Mundo de los Niños, y decir “este va a ser el centro de la ciudad”. Don José, ¿cómo así que van a traer el centro de allá a aquí?, le pregunté. Y

si tú miras ahorita la ciudad, el centro de la ciudad es Imbanaco, entonces es un visionario, veía mucho más de lo que la gente veía y se dedicaron fue a eso: a tener visión”. (Entrevista, 2)

No era sólo una ciudad para ellos y sus familias. Aspiraban a una ciudad en la que ellos, y todos los que venían desde abajo y habían alcanzado un lugar a través de su iniciativa y trabajo, pudieran vivir seguros y prósperos y disfrutar de los encantos tradicionales que Cali brindaba. Querían a Cali desde la nostalgia de una ciudad que se desvanecía a pedazos, y a cuya desaparición ellos habían contribuido. El mismo empleado de José Santacruz da una idea de ese amor nostálgico por la ciudad en la que podían andar anónimos y sin escoltas:

Eran muy caleños, les fascinaban las empanadas, el champús, los aborrajados: amaban la ciudad, hasta me erizo al recordarlo –ellos querían que la ciudad fuera la mejor ciudad de Colombia. América y el Cali tenían que ser los mejores. No era que el sólo América, no. (Entrevista 2014, 3)

Mientras no hubo guerra abierta se comportaron como esos habitantes de la ciudad que la recorrían con el único objetivo de disfrutarla, algo similar a lo que hacían los *flaneurs* de Baudelaire: los que reinventaban la ciudad, día a día, recorriéndola:

Cuando no había guerra estaban en todas partes, en todo lugar, yo estaba por fuera pero en los primeros años andaban por toda la ciudad tranquilamente, en todos los lugares públicos, en todos. Lo que pasa es que no eran reconocidos, no los habían sacado en televisión, lo que pasa es que José era muy popular y don Gilberto también, muy del pueblo, muy tranquilos. (Op. cit., 7)

La ciudad que los jefes del narcotráfico soñaron era una ciudad de clase media que no tenía por qué ser construida en las tinieblas exteriores de las zonas más inhóspitas de la periferia de la ciudad. Pachó Herrera y Chepe Santacruz compraron y urbanizaron terrenos situados dentro de la frontera urbana de la ciudad, en las comunas 17, 19 y 22. No lo hicieron en los lugares hacia dónde habían estado siendo enviados los pobres en las últimas décadas. Urbanizaron y construyeron en terrenos vecinos a los que la elite tradicional había urbanizado y construido en décadas anteriores. Cerca a San Fernando, El Templete y Tequedama, en el sur, Herrera y su familia y Chepe Santacruz.

Pachó Herrera y José Santacruz construyeron una buena parte de lo que hoy son el suroccidente y suroriente de Cali, haciendo vivienda multifamiliar para la clase media, con especificaciones urbanísticas superiores a las hoy observadas en la ciudad. El testimonio del mismo empleado de Santacruz da una idea del impacto que su antiguo jefe y sus socios caleños tuvieron sobre el desarrollo urbanístico y el negocio inmobiliario en Cali:

Entonces Pachó empieza a comprar toda la ciudad y a hacer edificios –que era el negocio de José: José hizo La Cascada, El mundo de los niños, cualquier cantidad de urbanizaciones aquí, tenía inmobiliaria Santa Ana, tenía varias inmobiliarias. Ellos, hermano, eran dueños de la ciudad. ¿Cuántas propiedades hay aquí –500000? 300000 eran de ellos. Los taxis, en ese tiempo, eran los taxis de ellos, todo lo manejaban, a la policía le pagaban, si un policía se ganaba en ese tiempo 400000 pesos, don Miguel pagaba otros 400000, si el sargento ganaba un millón, llévase otro millón, policía, ejército, curia, todo el mundo. Yo salía todos los días, y todos los días se pagaba una nómina, a la policía había que pagarle en efectivo, al ejército también. (Entrevista 2014, 6)

Dirigir el proceso urbanizador de la ciudad, tener en sus manos casi dos terceras partes de sus propiedades inmobiliarias, controlar la policía y el ejército y la seguridad ciudadana toda, y administrar una red de taxistas que garantizaban información instantánea sobre lo que pasaba en la ciudad era equivalente a tener en sus manos el destino de la ciudad. Desde hoy, parece sorprendente

que unos cuantos señores provenientes de las clases bajas, inmigrantes recientes unos, caleños los otros, con pasados delincuenciales, y fortunas hechas en el negocio ilegal más rentable del mundo, hayan podido controlar el destino de la ciudad sin ninguna resistencia efectiva de parte de las elites tradicionales.

Sin duda la estrategia de integración al orden existente elegido por los jefes de Cali facilitó el avance sin obstáculos de su proyecto. Los empresarios, industriales y notables de la ciudad veían en los nuevos señores una fuente de financiación inagotable sin ninguna ambición aparente de poder político. Los intercambios entre los dos grupos ocurrían en el mundo del mercado: los señores actuaban como prestamistas de última instancia, casi como mecenas de todos los proyectos de inversión que ocurrían en la ciudad, mientras que las elites tradicionales dejaban que su contraparte urbanizara con toda libertad, mientras ellas permanecían en el trasfondo de la escena, disfrutando de las ganancias, y sin asumir responsabilidad alguna en lo que estaba ocurriendo.

Para los jefes del narcotráfico caleño la seguridad era el punto más importante en su agenda para la ciudad. Primero había que garantizar, por todos los medios, la seguridad de ellos, de sus familias y asociados. Sabían que eran los hombres más ricos de la ciudad y, por tanto, el blanco perfecto de secuestradores, bandidos y colegas, y que sus fortunas provenían de actividades ilegales en las que la violencia jugaba un papel equivalente al de la ley en los negocios legales.

Por eso, compraron, cooptaron y pusieron en su nómina a una fracción considerable de los oficiales de la policía, el ejército y los servicios secretos del Estado y desarrollaron la red de seguimiento, información y comunicación más sofisticada de la historia de la ciudad y quizás de todo el país.¹¹ Los taxistas de la ciudad, unidos en red, recogían, y enviaban para su procesamiento, toda la información que circulaba por sus vehículos, en las calles, terminales de transporte y aeropuerto. La vida de la ciudad era observada, vigilada, monitoreada y procesada por especialistas al servicio de los líderes de las organizaciones de narcotraficantes de la ciudad.

Un control tan intenso, minucioso y profesional de la vida de la ciudad no había ocurrido antes. Eran miles de personas concentradas, en forma profesional, en el cuidado del orden y de la seguridad ciudadanas. Sí: en primer lugar cuidaban la seguridad de los líderes del narcotráfico, sus familias y organizaciones, pero al hacerlo en la escala en que lo hacían, vigilando todos los aspectos de la vida económica, política y cotidiana de la ciudad que pudiera afectar los intereses de sus jefes, terminaron generando seguridad y orden para la ciudad entera.

La identificación entre señores y ciudadanos alcanzó un punto muy alto con la adquisición del club de fútbol América de Cali por Miguel Rodríguez. De la mano del señor, América pasó de ser uno de los clubes más modestos del fútbol colombiano, eterno perdedor maldecido por Garabato, a convertirse en el más poderoso club de fútbol de Colombia, ganador de múltiples campeonatos nacionales. Su gloria deportiva siguió los pasos de la de sus nuevos dueños. La caída de los señores

¹¹ El mismo relacionista público de los Rodríguez cuenta que los nuevos comandantes de la Policía Metropolitana de Cali tenían dos ceremonias de posesión: la oficial, con las autoridades municipales, y la no oficial, con los Rodríguez. (Entrevista 2) Es decir, cualquier oficial que llegar a comandar la Policía de Cali sabían que debía presentarse ante el otro poder verdadero: el de los señores, del que dependería su gestión y los ingresos económicos, tanto de él como de sus hombres.

anunció la lenta caída del equipo hasta llegar en su descenso a la liga B del fútbol colombiano. (Vivas et al. 2014) El control de la seguridad se convirtió durante los tiempos dorados de los señores en el control de la felicidad colectiva de los hinchas americanos. Todo habría de derrumbarse con la caída de los señores.

Los límites ilegales y legales entre las organizaciones económicas surgidas alrededor del narcotráfico fueron desapareciendo con la transformación de la liquidez excesiva derivada de su actividad fundamental en capitales de distinto tipo. Dentro del narcotráfico las reglas del juego que los señores impusieron eran transparentes y expeditas: pagar las obligaciones, tomar responsabilidad compartida por la pérdida de envíos o dinero, nunca decir nada si eran detenidos por las autoridades, honrar el pago de las ganancias derivadas de un envío exitoso, pagar las deudas adquiridas. Privilegiaban el pago de las obligaciones adquiridas sobre la eliminación violenta de los incumplidos. En el orden que crearon, garantizar el flujo normal de los negocios estaba por encima del ejercicio directo de la violencia. (Chaparro 2005)

Pero la violencia era inevitable en un mundo con grandes capitales en riesgo y en el que alternativas como “no pagar” o “apoderarse de la riqueza de otro por la fuerza” eran siempre una posibilidad real. Las relaciones económicas entre los cuatro jefes históricos del narcotráfico caleño –Gilberto y Miguel Rodríguez, Pacho Herrera y José Santacruz— siempre fueron fluidas y basadas en la confianza. Las relaciones con traficantes menores y operadores no siempre fueron así. Las diferencias económicas y personales se convertían en conflictos que eran resueltos a través de la violencia. El orden imperante aseguraba, sin embargo, que la eliminación de algún traficante, operador o jefe tuviera que ser aprobada por los líderes máximos, siempre y cuando involucrara lazos entre personas de organizaciones distintas.

El control de cada jefe sobre su propia organización era respetado y sólo con su aprobación era posible eliminar a algún operador o socio que no hubiera cumplido con sus obligaciones, o hubiera usado la fuerza contra miembros de otras organizaciones. En ese sentido, los traficantes de Cali estuvieron cerca de alcanzar un orden similar al que tenían las grandes organizaciones mafiosas italianas del siglo pasado. [Nuzzi & Antonelli 2010; Gambetta 1993] La violencia contra un miembro de otra organización sólo podía ser ejercida con la autorización del jefe de la parte ofensora, y en casos que involucraran al jefe mismo, sólo los líderes máximos podían autorizar el uso de la violencia.

Dejando a un lado la sangrienta guerra contra Pablo Escobar, que alcanzó niveles nunca vistos, es evidente que la violencia asociada a las organizaciones de Cali fue mucho menor que la producida, años después, por las del Norte del Valle. Aun así, la violencia instrumental comenzó a extenderse por la sociedad toda, con valles y picos que dependían de los cambios en las interacciones entre el crimen organizado, la delincuencia común y la guerrilla urbana. Mientras que a finales de los años 1970 y comienzos de los 1980 la violencia se mantuvo a niveles bajos, similares a los del promedio nacional, a partir de 1983 hay un aumento continuo hasta 1987, cuando comienzan un notorio descenso que dura hasta 1989, para luego dispararse durante la guerra abierta contra Pablo Escobar y sus aliados. (Guzmán 2013)

La seguridad que pusieron en marcha, en tiempos de paz y de guerra, no era sólo para sus familias y sus organizaciones. Cubría a la ciudad entera. No fue una seguridad mafiosa en el sentido de que nunca cobraron por protección, ni extorsionaron negocios más pequeños, ni exigieron tributo a sus colegas en el mundo de las actividades ilegales. Fue una seguridad que garantizaba la marcha normal de los negocios en una economía capitalista de mercado, sin imponer tributos sobre negocios y ciudadanos.

A diferencia de Pablo Escobar en Medellín, los jefes de Cali no atentaron contra la elite tradicional, ni intentaron secuestrarlos ni imponerles tributos. Por el contrario, su relación con empresarios, comerciantes y urbanizadores fue de cooperación económica y financiera, y de subsidio en materia de seguridad. La guerra que libraron nunca fue contra la clase dominante tradicional. Fue contra un colega que había tomado el camino peligroso y suicida de la confrontación violenta con el Estado y con sus propios socios y colegas.

Si tomáramos la perspectiva de la teoría tradicional del Estado, los jefes caleños ni siquiera habrían estado cerca de la formación de una ciudad-Estado: no hicieron la guerra contra el Estado central ni contra las elites locales, y tampoco extrajeron tributos de sus ciudadanos. Sin embargo, al construir el más grande aparato de seguridad puesto en marcha en Cali, crearon, en forma inadvertida, las condiciones para librar una guerra despiadada contra Pablo Escobar y sus aliados en el corto plazo, y para la formación de orden social a través del uso de la violencia, la información y la inteligencia, en el largo plazo.

Hacer morir y dejar vivir

Las interacciones entre operadores violentos, antiguos militares, miembros activos de las fuerzas armadas y policivas, narcotraficantes, delincuencia común, jóvenes vulnerables, y entre negocios legales e ilegales condujeron a la formación de un orden en el que *hacer morir y dejar vivir* (Foucault 2002) estaba en manos de ciudadanos con el poder de usar las armas contra quienes consideraba sus enemigos o contra quienes no merecían vivir en la ciudad. Esos ciudadanos podían actuar en concierto con miembros y aparatos del Estado o hacerlo por cuenta propia. En ambas alternativas el Estado es sustituido como el garante legítimo de la vida y la seguridad de los ciudadanos asociados a él.

Emergió entonces un doble proceso. De sustitución, por una parte, del Estado como garante de la vida y la seguridad de los ciudadanos, y de disociación de los ciudadanos del lazo de confianza simbólica (Bordieu 2012) que los unía con el Estado, de la otra. Es una disociación que ocurrió, y sigue ocurriendo, tanto en las acciones, como en las expectativas de seguridad, de todos los que toman justicia por su cuenta, ordenan la ejecución de sus enemigos y socios, y deciden en últimas quién puede vivir y quién no.¹²

¹² En los últimos años las intervenciones directas de la Policía en barrios del oriente y de la ladera de Cali han terminado en enfrentamientos masivos de sus habitantes contra los agentes de la Policía, que actúa como una fuerza de ocupación en territorio enemigo y no como un organismo de protección de los ciudadanos. Aunque

La ruptura del lazo simbólico entre Estado y ciudadanos introduce la máxima incertidumbre posible en la vida de los ciudadanos: la relacionada con la vida misma. Es el regreso a una situación similar a la que vivían los súbditos de los Estados absolutos europeos: sus vidas estaban en manos de las decisiones del soberano, con una diferencia crucial: en la Cali de hoy no hay un soberano que decida sobre la vida y muerte de los ciudadanos. En su lugar hay un sistema invisible, y hasta ahora no descifrado, que decide a quién dejar vivir y a quién hacer morir.

Al estudiar la irrupción de la biopolítica en el siglo XIX, y el paso a la nueva fórmula “hacer vivir y dejar morir”, Foucault caracterizó la situación de los súbditos cuando prevalecía el poder absoluto del soberano sobre la vida y la muerte:

Como saben, el derecho de vida y muerte era uno de los atributos fundamentales de la teoría clásica soberanía. Ahora bien, ese derecho es un derecho extraño, y lo es ya en el plano teórico; en efecto, ¿qué significa tener un derecho de vida y muerte? En cierto sentido decir que el soberano tiene derecho de vida y muerte significa en el fondo, que puede hacer morir y dejar vivir; en todo caso que la vida y la muerte no son fenómenos naturales, inmediatos, en cierto modo imaginarios o radicales, que están fuera del campo del poder político. Si ahondamos un poco y llegamos por decirlo así hasta la paradoja, en el fondo quiere decir que, frente al poder, el *súbdito no está, por pleno derecho, ni vivo ni muerto*. (Foucault 2002, 217-218, mis cursivas.)

Y era un derecho, además de “extraño”, “desequilibrado”:

El derecho de vida y muerte sólo se ejerce de una manera desequilibrada, siempre del lado de la muerte. El efecto del poder soberano sobre la vida sólo se ejerce a partir del momento en que el soberano puede matar. (Ídem.)

Los ciudadanos de la Cali de hoy enfrentan una situación similar: no saben si están vivos o muertos ni, sobre todo, cuándo podrían pasar de una condición a la otra. Esa incertidumbre fundamental es un efecto de la sustitución del Estado como garante de la vida por un sistema invisible y sin nombre que decide quién vive y quién muere. No son unas cuantas personas las que deciden quién vive y quién muere, tampoco un comité, es un sistema en el que interactúan muchas partes, con intereses y planes distintos, que comparten el uso de la violencia letal como herramienta básica de supervivencia y de obtención de ventajas económicas.

El orden social que los jefes de Cali habían puesto en marcha en los años 1980 se desmoronó con la persecución desatada por el gobierno de Samper, bajo presión de los Estados Unidos de América, y de la tormenta desatada por la filtración de las grabaciones que revelaban la financiación de su campaña por parte de los narcotraficantes de Cali y del Valle. No es coincidencia que 1994, el año en el que su autoridad sobre Cali colapsara a la vista de todos, sea también el de mayor violencia en la historia de la ciudad.

Una vez eliminado Pablo Escobar en diciembre de 1993, las fuerzas paramilitares y criminales que lo habían derrotado en una guerra sin cuartel y sin reglas tuvieron las manos libres para enfrentar al

no tenemos los datos exactos de los episodios ocurridos, su número debe estar en las decenas. En general, la percepción que los habitantes de esos sectores tienen de la Policía coincide con la que la última tiene de ellos: los pobladores ven a la fuerza policial como un enemigo que los golpea y persigue sin justificación, y la policía ve a los pobladores como una agrupación muy grande de sospechosos que pueden devenir enemigos en cualquier momento.

segundo enemigo en su lista: las guerrillas izquierdistas que les disputaban el control de las zonas cocaleras y estaban infligiendo duras derrotas al ejército regular de Colombia. Por eso, la segunda mitad de los años 1990 trajo consigo la aceleración de la guerra irregular, con la entrada de las fuerzas paramilitares, dirigida por veteranos de la guerra contra Pablo Escobar. Carlos Castaño y sus asociados calcularon que todo estaba listo para enfrentar a la guerrilla en una guerra brutal para la que estaban bien preparados.¹³

Las masacres sistemáticas de los paramilitares fueron respondidas por secuestros masivos de notables en el corazón mismo de varias ciudades colombianas. Y los secuestros masivos de ciudadanos en el corazón de varias capitales del país fueron respondidos con la violencia paramilitar generalizada. En Cali, la guerra irregular irrumpió en una de sus zonas más exclusivas con el secuestro masivo de La María, realizado por el Eln en 1999. Después de varios meses de persecución y de negociaciones económicas entre los familiares de las víctimas y los secuestradores, los secuestrados regresaron a la libertad. Lo que quedaba del sistema de seguridad de los años 1980 fue retroalimentado por la terrible violencia desatada después del secuestro de La María contra los campesinos de las zonas en que los secuestrados fueron mantenidos por la guerrilla, y con la permanencia en Cali de los paramilitares contratados para “limpiar” la región.

Amenazados en su seguridad, notables de la ciudad llamaron a las fuerzas paramilitares y el Bloque Calima de la AUC fue activado muy rápido, y entró en acción haciendo un recorrido sangriento a lo largo del Río Naya, matando a decenas de campesinos, y desplazando a miles que habían tenido la desgracia de vivir en la zona por la que había transitado el ELN con los secuestrados de La María. El testimonio de varios desmovilizados de las autodefensas establece que los paramilitares no llegaron al Valle por invitación de los narcos, sino que

Fueron empresarios legales los que les pidieron que “limpiaran el departamento de guerrillas”, después de que el ELN secuestrara masivamente a dos centenares de feligreses en una iglesia de Cali. (Ronderos 2014, 239)

Los notables del Valle aspiraban a que algún “narquito” financiara su iniciativa de borrar para siempre a la guerrilla de la región. Juan Rodrigo García, hermano de Doble Cero, contó una historia que Carlos Castaño¹⁴ —que mantenía muy buenas relaciones tanto con los narcos como con los notables de Cali y del Valle— le había contado a su hermano:

En una de las reuniones con los empresarios del Valle, cuyas identidades aún son desconocidas, y Carlos Castaño, cuando estaban discutiendo el alto costo que tendría montar y sostener un grupo paramilitar, un industrial dijo, medio en broma, medio en serio, “si no habría un narquito que les financiara el grupo paramilitar”. (Ídem.)

¹³ Hay evidencia de las relaciones cercanas que los Castaño tuvieron, primero, con los señores de Cali y más tarde con los jefes del Norte del Valle. (Entrevista 2) Las relaciones entre los enemigos de Pablo Escobar no dejaron de ser cercanas y están en el origen de buena parte de la violencia ocurrida en la región. El alcance y la conformación de esas redes es un trabajo que está por realizar.

¹⁴ Carlos Castaño viajaba en forma constante a Cali para reunirse con los narcos del Norte del Valle, los empresarios del Valle, y con el asesinado obispo de Cali, Isaías Duarte Cancino. Dicen que a veces viajaba disfrazado de mujer. Las reuniones del jefe paramilitar con los narcos no eran secretas: algunas fueron realizadas en hoteles de cinco estrellas del sur de la ciudad.

El éxito de los paramilitares fue tan rotundo que los notables de la región perdieron interés en la financiación de los paramilitares y se “convirtieron en fantasmas” (Ibíd.), como dijo Vicente Castaño en su historia. La dimensión financiera es fundamental para entender lo que pasó, y sigue pasando en la ciudad: el costo de formar, entrenar, activar y mantener un frente o un bloque paramilitar era muy alto, con tarifas que llegaban, para los grandes jefes narcos del Norte del Valle, al millón de dólares mensuales, cuando estaban en el punto más álgido de la guerra entre Don Diego y Wílber Varela. (López 2008, 2010)

Los notables de Cali y de la región, acostumbrados a recibir seguridad subsidiada de los Rodríguez y sus socios, no estaban dispuestos a pagar las tarifas exorbitantes que Castaño y sus aliados cobraban a los jefes narcos del Norte del Valle. Aun así, la estancia de los paramilitares en la región no fue pasajera. No salieron de Cali y del Valle tan pronto limpiaron el Naya de indígenas, campesinos y guerrillas. Aquí permanecieron, desmovilizados o no, y pasaron a integrar servicios de seguridad, oficinas de cobro y organizaciones criminales. Basta con dar una mirada rápida a las hojas de vida criminales de algunos de los sicarios detenidos en los últimos años para confirmar la presencia activa del largo brazo del paramilitarismo.¹⁵

Desde el punto de vista de la estabilidad del orden ciudadano, los jefes de Cali nunca intentaron desestabilizar o romper el orden político y social existente. Buscaron integrarse a él y promover un urbanismo con valores de clase media, sin entrar nunca en conflicto con los quienes detentaban el poder en la ciudad.

Constituyeron un gobierno implícito que no cobraba por los servicios de seguridad que prestaba, respetaba el orden de negocios existentes, y participaba, como financiador de última instancia, en la mayor parte de los proyectos de inversión realizados en la ciudad. Pero las externalidades positivas que generaban para los habitantes de Cali no llegaron gratis. Al derivar sus ingresos de una actividad ilegal, en la que interactuaban con organizaciones más propensas a la violencia, los benefactores de la ciudad estaban expuestos a la guerra y al uso de la violencia para garantizar su supervivencia y conducir sus negocios.

Por eso, la ciudad que había recibido gratis una seguridad que no venía de los gobiernos elegidos ni del Estado central, debió vivir en carne propia las consecuencias de la guerra que los jefes de Cali libraron contra Pablo Escobar y sus aliados. Droguerías, viviendas, campos deportivos y negocios de sus líderes, fueron objetivo de cientos de ataques con explosivos y armas automáticas, y la ciudad entera se convirtió en un campo de batalla.

En esa guerra sangrienta se formaron muchos de los sicarios, operadores violentos y expertos en inteligencia y contra-información que luego se convertirían en los líderes de las nuevas organizaciones de narcotraficantes en ascenso, y en los jefes y operadores de las redes de sicarios

¹⁵ “Camilo”, el hombre que dirigió la masacre de Ciudad Jardín, en la noche del 24 octubre de 2014, había sido suboficial del ejército y pertenecido a Los Urabeños –herederos de las autodefensas dirigidas por los hermanos Castaño— y actuado en el Magdalena Medio y en el Norte del Valle. Había actuado bajo las órdenes de Otoniel Úsuga y Chicho Urdinola. Todos los hombres que participaron en el operativo tenían experiencia en grupos paramilitares o habían estado, o estaban, al servicio de jefes narco. Otro antiguo paramilitar, acusado de haber participado en cerca de 200 asesinatos, fue detenido en Cali, en donde vivía en libertad condicional por la masacre de la Barra de la 44, ocurrida también en 2014.

que conformarían la infraestructura criminal (oficinas de cobro) que hoy ofrece sus servicios a quien los requiera, y es responsable por una proporción no despreciable de la violencia homicida de las últimas dos décadas en Cali.

Muchos de esos especialistas en violencia venían de las fuerzas armadas y de policía y usaron y seguían, y siguen, usando su entrenamiento y habilidades al servicio del crimen y de sus propios intereses. Las interacciones entre oficiales y hombres de las fuerzas armadas y policivas con el crimen organizado propiciaron, a mediados de los años 80 (antes de la guerra con Escobar), el uso de la violencia letal contra ladrones, drogadictos, prostitutas, homosexuales, travestis, guerrilleros urbanos, auxiliares de la guerrilla, y marginales en general, en lo que fue conocido como procesos de “limpieza social”.

Un catalizador evidente de este proceso fue el accionar de la guerrilla urbana del M-19 en Cali y Yumbo. Su penetración militar y política en zonas de ladera y del oriente de la ciudad lo llevó a competir con la seguridad privada y las fuerzas policivas en la limpieza de ladrones y marginales de esos barrios. La ofensiva desatada por el ejército contra el M-19, incluso desde antes de la fallida toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, desarticuló la mayor parte de las organizaciones que había creado en los barrios de Cali y eliminó a jefes militares y militantes. (Guzmán 2013, 355-359)

La toma violenta del barrio Siloé, en diciembre de 1985, por parte de unidades de varios batallones el Ejército, y de unidades de la Policía Nacional, significó la destrucción del trabajo político y militar más significativo del M-19 y la muerte de varias decenas de sus militantes.

Pero la operación de los llamados escuadrones de la muerte había empezado antes y había cobrado la vida de centenares de marginales y de activistas sindicales y de izquierda. Como lo afirma Guzmán (Ídem., 357), las acciones de los grupos de limpieza social ocurren en las llamadas “ollas” o zonas “negras” de la ciudad, dejando bien claro cuáles eran los objetivos y las motivaciones de sus autores. El uso de gases lacrimógenos para eliminar a un grupo de homosexuales en el barrio Sucre hizo evidente el entrenamiento militar de quienes ejecutaban la limpieza social.

Como lo sugiere el mismo Guzmán, más allá de la identidad de las víctimas, el mensaje que enviaban los asesinos de marginales y delincuentes comunes era de “reafirmación del orden social”. (Íbid., 359) Sin duda, la intención de quienes realizaban la limpieza era reafirmar el orden existente. Lo que no podían ver, y no vieron, fue que esa violencia contra los marginales inauguró un sistema complejo que fue usado más tarde contra todo aquel que fuera elegido como objetivo de quienes pagaban por matar, y que se extendió, a través de múltiples trayectorias, por la sociedad toda. Lo que parecía un ejercicio natural dentro del objetivo general de garantizar la seguridad de los jefes y de su ciudad, se convirtió en un sistema que creció por sí mismo hasta reemplazar al Estado y al gobierno local en sus funciones como garantes de la vida y de las propiedades de los ciudadanos.

Es una característica de los sistemas sociales complejos: las interacciones entre sus partes producen efectos que *no* están en sus partes originales, ni en los planes de quienes las ejecutan. Hacer morir y dejar vivir en la Cali de hoy es el resultado de los procesos de retroalimentación desatados por las

interacciones entre las partes originales del sistema y las que se han sumando a él en el curso del tiempo.

Aunque no hay evidencia que ligue a los jefes de Cali con la limpieza social y la justicia privada, es muy factible la vinculación de miembros de sus equipos de seguridad en la ejecución de marginales y delincuentes menores. Esos operadores violentos, junto a los paramilitares que llegaron luego, y a los sicarios formados en las acciones ocurridas en los años 1980 y 1990, formaron los nodos activos y las conexiones que habrían de convertirse en el sistema de violencia por contrato que decide quién muere y quién vive hoy en la ciudad.

La caída

Los señores de Cali no aspiraron al poder estatal. No quisieron centralizar el poder que ejercían sobre la ciudad, creando una burocracia permanente, y tratando de legitimarla a través de la participación en la política electoral. Nunca fueron contendientes en ese campo. Sin embargo, y esta es la paradoja que está en el centro de lo ocurrido en Cali en las últimas décadas, a su posición como prestamistas de última instancia —algo esperable en la emergencia del poder estatal en las ciudades— sumaron su poder como garantes de la seguridad física, y hasta política de la ciudad. Es decir, sin ser nunca aspirantes al poder estatal, ejercieron poder exclusivo sobre la seguridad ciudadana: lo que Tilly denominaba la coerción física o armada en la constitución de los Estados.

Ejercer un poder exclusivo sobre la seguridad ciudadana, sin aspirar al poder estatal, generó la creación de una red creciente de operadores, funcionarios, especialistas en violencia, miembros de las fuerzas armadas y policivas, paramilitares y simples sicarios que ocuparon el espacio vacío dejado por el Estado y terminaron ejerciendo, sin proponérselo nunca, el poder de los soberanos absolutos: hacer morir y dejar vivir. Como no entraron en la confrontación sangrienta con el Estado que Pablo Escobar desató en Medellín, la red de seguridad que los señores dejaron como su herencia se convirtió, con las guerras que siguieron, en un sistema perverso que produce seguridad a través de la protección armada, la extorsión y la oferta de servicios criminales para una demanda cuya estabilidad sólo puede ser explicada por la expansión de conductas criminales hacia diversos segmentos de la sociedad.

Pierre Bordieu sugería, siguiendo a Norbert Elias, que la instauración de la dominación estatal por medio de la violencia tenía como “contrapartida una forma de paz”. (Bordieu, Op. cit., 183) La dominación llegaba por la vía de procesos de competencia entre contendientes violentos que aspiraban a quedarse con el monopolio de la extorsión legítima de los asociados. Pero el triunfo del Estado por medio de la violencia tenía una contraparte positiva:

La concentración de los medios de violencia en un número bien pequeño de manos tiene como consecuencia que hay cada vez menos hombres de guerra dispuestos a conquistar territorios haciendo uso de los recursos militares de que disponen. (Ídem.)

Al imponerse uno de los contendientes sobre los demás, la lucha armada por la dominación dentro de la ciudad, o el reino, desaparecía para dar paso a un Estado absoluto y a una paz conseguida por simple desaparición de los que estaban dispuestos a hacer la guerra. Pero el caso de Cali contiene

una ambigüedad particular que lo hace distinto al modelo general que Bordieu exponía. En Cali el sistema de seguridad puesto en marcha por los señores, al estar circunscrito a la ciudad, y no tener en cuenta el poder del Estado central, no consiguió la paz. Logró, en sus mejores momentos, garantizar la seguridad para la ciudad, pero no hacía parte de un Estado independiente que pudiera hacer frente a las imposiciones de otros Estados.

Cuando el Estado colombiano, unido con los Estados Unidos de América, lanzó su ofensiva contra los señores de Cali, el sistema de seguridad diseñado por ellos resultó inútil. De hecho, al no haber aspirado nunca al poder absoluto no estaban dispuestos a hacer la guerra contra la coalición de Estados que los asediaba. Optaron por aceptar su dominación absoluta, a pesar de haber intentado negociar con el gobierno colombiano su estadía en el país, y de haber pospuesto hasta dónde era posible la decisión de ser extraditados a los Estados Unidos. Sin embargo, y esta es la ambigüedad mencionada, los remanentes del sistema de seguridad que habían erigido no desaparecieron con la victoria del Estado.

Lo que queda

La caída de los señores, propiciada por el proceso 8000, la presión de los Estados Unidos, y la irrupción de los paramilitares y de los violentos jefes del norte del Valle, trastocó todas las relaciones económicas en la ciudad. La dura legislación contra el enriquecimiento ilícito y la riqueza derivada del narcotráfico condujo a una expropiación masiva de las propiedades inmobiliarias y de las empresas productivas de los señores –ya muertos o cumpliendo largas condenas en los Estados Unidos. Miles de propiedades pasaron a otras manos –casi siempre a través de procesos corruptos o poco transparentes— y otras miles terminaron a abandonadas, sufriendo rápidos procesos de deterioro. La pérdida de valor involucrada en ese reparto del botín arrancado a los vencidos no ha sido calculada todavía, pero debe estar en los miles de millones de dólares.

Tampoco ha sido ni investigado ni calculado el valor de las deudas que los socios y deudores de los jefes de Cali tenían en el momento en que su imperio se desmoronó. No sabemos si fueron pagadas, o no, a sus familiares y asociados. Lo más probable es que no lo hayan sido. Por eso, para muchos inversionistas y empresas legales de la ciudad, la caída de los señores fue una bendición que bajó del cielo en forma de deudas desvanecidas. Pero sólo fue un alivio pasajero. Unos pocos años después, los efectos negativos de la pérdida repentina de la inyección de liquidez y capital que los señores daban a la economía de la ciudad se combinaron con los de la crisis económica, que afectaba a varias economías del Tercer Mundo y de Asia, para gestar una recesión plena de la actividad económica.

La expropiación, legal o ilegal, de inmuebles y empresas de los señores desencadenó un complejo proceso de distribución del botín de los derrotados. En él participaron funcionarios estatales, operadores, empresarios, narcotraficantes, abogados, notarios, contadores y testaferros. Fue una rapiña abierta, cubierta por una legalidad precaria. Ya en la segunda década del siglo XXI, el regreso desde las cárceles de los Estados Unidos de narcos que habían pagado sus condenas, y los

intentos de recuperación de bienes y propiedades por parte de familiares de los señores y otros narcotraficantes caídos en desgracia explican algunos de los ajustes de cuentas, las ejecuciones y las amenazas que han venido ocurriendo en la ciudad.

Despojados del patrocinio económico de sus creadores, algunos elementos del sistema de seguridad sobrevivieron en distintos niveles de articulación, pasando a trabajar con los nuevos jefes que llegaban del norte del Valle, y prestando sus servicios a los clientes, viejos y nuevos, que los negocios de la ciudad producían. Fue una victoria pírrica del Estado. Cuando todo estaba dado para que la autoridad estatal recobrara el monopolio de la violencia y la seguridad, el Estado —por motivos y procesos que están por estudiar— no pudo lograrlo y dejó el espacio abierto para que nuevos jefes, ligados a otros tipos de organizaciones criminales, con estrategias mafiosas de protección armada y extorsión, pasaran a luchar por el control de la ciudad.

No es bueno olvidar que los primeros años de la década del noventa fueron los más violentos de la historia republicana de Colombia. La guerra contra Pablo Escobar y sus aliados que había puesto de rodillas al Estado colombiano durante el gobierno de Barco (1986-1990), recrudesció hasta llegar al terrorismo masivo y la guerra sin reglas en el gobierno de Gaviria. Este intentó algunas reformas al Estado para enfrentar la situación crítica en que se encontraba. Gerard Martin resume así las medidas tomadas por el gobierno de Gaviria:

Creó el Centro de Información Estratégica Policial CIEP, con una sala estratégica en la Presidencia. El CIEP reunía en particular información de la Policía, el Servicio de Inteligencia doméstica DAS, la Fiscalía, Medicina Legal y varias entidades locales (Salud, Transporte). Al mismo tiempo, la elección directa de los alcaldes (desde 1988) también transformó el panorama, y la nueva Constitución (1991) definió una mayor discrecionalidad para el nivel municipal en las temas de seguridad ciudadana. (Martin 2014, 11.)

En Cali, las reformas estatales coincidieron con la elección de un especialista académico en la epidemiología de la violencia, el doctor en salud pública, Rodrigo Guerrero, como alcalde de la ciudad. Guerrero creó una consejería para el Desarrollo, la Seguridad y la Paz (Desepaz), y diseñó y puso en marcha el primer Sistema de Vigilancia de Lesiones Fatales de Colombia en 1993, haciéndolo parte de la estructura del gobierno municipal, y creó en la Universidad del Valle, el Centro de Investigación sobre Salud y Violencia (CISALVA). (Martin, Op. cit.) En todos los casos, las instituciones creadas por Guerrero se convirtieron en parte de la estructura estatal, más allá de los cambios de orientación de los alcaldes elegidos. Son, por tanto, instituciones estatales estables con un impacto permanente sobre la forma en que la seguridad de los caleños es administrada.

La gestión de Guerrero estuvo marcada por un fuerte compromiso intelectual con el enfoque epidemiológico, entendido como el único enfoque científico válido para estudiar, entender y superar la violencia urbana. Siguiendo el enfoque científico experimental —recuperación permanente de los datos relevantes, y ajuste de las estrategias contra la violencia de acuerdo a sus resultados en un experimento natural—, el alcalde y su equipo pusieron en marcha un experimento natural que debería arrojar los mejores datos y ajustar, hasta aproximar un óptimo, la política pública contra la violencia urbana.

Suponían que individuos enfrentados a distintos factores de riesgo incurrieran en acciones violentas o en el delito en general, que podían ser mitigadas, o eliminadas, si los factores de riesgo eran

controlados de forma efectiva. Era un enfoque individual, en el que los individuos decidían qué hacer, de acuerdo a su situación de riesgo, y en el que las interacciones entre ellos quedaban reducidas a un tipo de contagio similar al de las epidemias virales.

Encontraron que el 56% de los homicidios ocurría en los tres días del fin de semana y una cuarta parte el día domingo (Concha et al., 1994), y que en una proporción superior al 50% de las víctimas de homicidio o de lesiones personales estaban bajo el efecto del alcohol. Las medidas adoptadas siguieron el espíritu de los hallazgos empíricos: regular la venta de alcohol, establecer un horario limitado para la fiesta nocturna, y ordenar el casco para los motociclistas y sus pasajeros.

La juiciosa aplicación del llamado “método científico” sufría, sin embargo, de un grave vacío: olvidaba que la violencia registrada no era sólo el producto de decisiones individuales, sino de interacciones entre grupos criminales organizados y entre individuos que demandaban los servicios de especialistas en violencia. No era un olvido menor: desaparecía todo lo que estaba en la base de la terrible violencia que el alcalde Guerrero debió enfrentar durante su periodo al frente de la ciudad. El instrumento elegido y construido por Guerrero era muy fino, pero no era el apropiado para entender los mecanismos de reproducción de una violencia asociada a redes en las que interactuaban individuos y organizaciones situadas en ambos lados de la ley.

El monopolio total del enfoque epidemiológico sobre el estudio y tratamiento de la violencia urbana en Cali es el otro factor que explica por qué lo que restaba del sistema de seguridad de los señores se convirtió con tanta facilidad en un sistema espontáneo de violencia. Piensen qué le podría ocurrir a un paciente con neumonía a quien los médicos insistieran en tratar con medicamentos apropiados para una laringitis. Es lo que ha ocurrido en Cali en los últimos veinte años: después de negar la existencia del crimen organizado y de la práctica de pagar por matar, el propio alcalde de Cali ha tenido que reconocerla ante la fuerza de los hechos. Pero tanto él, como sus funcionarios, y las elites locales, no han dejado de tratar la violencia que mata casi dos mil personas al año, como un fenómeno derivado de la intolerancia, el alcohol y todos los factores de riesgo que uno pueda imaginar.

Aunque la sustitución de elites ocurrió, y hasta cierto punto la vida política de la ciudad se democratizó en el sentido estrictamente electoral, el tratamiento de la seguridad ciudadana no hizo más que empeorar. En una extraña continuidad, los sucesores de Guerrero mantuvieron y consolidaron las instituciones encargadas de medir y controlar la violencia en Cali, y siguieron la misma línea de conservar el statu quo en materia de seguridad. Es una extraña continuidad porque la rotación de elites y de grupos electorales, de las más variadas orientaciones políticas, nunca llevó a cuestionar ni la política ni las formas de medición existentes. De hecho, decidieron dejar el problema práctico de controlar la violencia a la Policía Nacional, y al gobierno central lo relacionado con la creciente violencia ligada al narcotráfico y a la entrega y posterior confesión de narcos de la región a las autoridades de los Estados Unidos.

Para gobernantes más interesados en recuperar la inversión realizada por sus financiadores y en obtener ventajas privadas, resultaba conveniente dejar el tratamiento de la seguridad y la violencia a Estado central y a los Estados Unidos. El discurso público comenzó a privilegiar el carácter importado o externo de la violencia que crecía en la ciudad. Las consecuencias sangrientas de las

delaciones de grandes jefes del narcotráfico en las cortes de los Estados Unidos parecían darle la razón a la hipótesis de la violencia importada. No, no era un problema de Cali, era un problema entre bandidos que están ajustando cuentas a informantes y traidores. El hecho desnudo era cierto: una parte considerable de la violencia explosiva de 2004, por ejemplo, estuvo ligada a la eliminación de los socios, familiares, empleados y amigos de Víctor Patiño Fómeque, ordenada por Chupeta, su antiguo socio y amigo.

Pero la inferencia asociada no lo era. La violencia que resultaba del castigo ejemplar de la traición entre grandes narcotraficantes no era externa: se extendía por todas las esferas en las que había conexiones económicas y sociales entre los capos y sus múltiples socios, empleados, amigos y familiares. El alcance de la violencia había devenido co-extensivo con el alcance de las conexiones económicas, sociales y políticas de los narcotraficantes. Las vastas y tupidas redes de negocios, representaciones, deudas y sociedades se convirtieron, en momentos de cambio de lealtades, en redes por las que pasaba la violencia letal.

La convergencia entre lo que quedaba del sistema de seguridad de los señores y la ruptura repentina y violenta de las grandes redes de negocios y deudas de los narcotraficantes que los habían sucedido consolidaron el sistema de violencia emergente que hoy todavía rige en la ciudad. No toda la violencia venía del narcotráfico y sus ajustes de cuentas: tanto los ciudadanos con otras ocupaciones que también pagaban por matar, como los enfrentamientos entre pandillas que luchaban por el control de una manzana, o dos, de un barrio, contribuían a la estabilidad de la violencia homicida.

La nueva política de seguridad: encerrar a los pobres

Con el auge de la Seguridad Democrática, a mediados de la primera década de este siglo, el Estado central se unió con la administración local y los intermediarios sociales (Comfamiliar) de las elites tradicionales para ensayar una nueva estrategia de control de los más pobres y de la violencia asociada a sus territorios. Los habitantes del jarillón del río Cauca fueron desalojados y obligados a vivir en 34 metros cuadrados por familia, en una urbanización diseñada con mentalidad carcelaria – Potrero Grande. Allí fueron concentradas más de treinta mil personas (casi diez personas por casa en promedio), en un terreno inhóspito, sin equipamientos urbanos, ni colegios ni guarderías, viviendo sus vidas en las calles –dado el minúsculo tamaño de las viviendas ofrecidas por el gobierno.

En el universo panóptico diseñado por el gobierno, en el que jóvenes y adultos están sometidos al imperio de bandas criminales que extorsionan a todo el que tenga un ingreso, y en el que los más jóvenes tienen que agruparse en pandillas para sobrevivir, la violencia es inevitable. Valeriano Carabalí, un habitante de Potrero Grande, da una definición insuperable del tipo de violencia que les correspondió:

A un nieto mío le pegaron un tiro en una pelea de pandillas. Él no estaba peleando, no le hace daño a nadie. Pasó por ahí, se enamoraron de él y le pegaron un tiro por acá, por la espalda y le dañaron todo el organismo. (Cuadernos Ciudadanos 2014, 65)

Muchos de los habitantes de Potrero Grande, desterrados de la guerra irregular que los expulsó del Sur y del Pacífico, han vuelto a ser víctimas de una nueva forma de guerra, más dura y más difícil de entender. Muchos de ellos eran veteranos de la invasión de la Colonia Nariñense, un asentamiento realizado sobre una laguna de doce metros de profundidad, que fue rellenada por desterrados que intentaban conseguir un lugar para vivir. (Op. cit., 63) De allí pasaron a vivir la violencia concentrada en el universo cerrado de Potrero Grande. El experimento ha producido lo esperado: mayor violencia y anomia, menos comunidad, falta de horizontes, organización violenta para sobrevivir en un medio hostil.

Lo nuevo es la intervención del Estado central y de las autoridades locales en el control de los pobres a través de su encierro en territorios en los que la violencia se convierte en la opción fundamental para la supervivencia, y en los que la estigmatización de sus habitantes es inducida desde arriba. (Wacquant 2000) La justificación técnica para el desalojo y traslado de los habitantes de las riberas del río Cauca fue el riesgo que corrían ellos y la ciudad al vivir sobre un terreno frágil, cruzado en su interior por termitas y hormigas, que separaba las aguas del río de la ciudad y, sobre todo, del acueducto de Cali. En sus testimonios, habitantes de Potrero Grande cuentan cómo fueron llevados hasta allá:

A nosotros nadie nos preguntó si nosotros queríamos venir para acá. Que teníamos que venimos y desocupar allá porque estábamos en alto riesgo. Allá no pasaba nada con nosotros. (Ídem., 64)

Lo que no les contaron fue el *alto riesgo económico y social* en el que incurrían al aceptar su traslado al experimento urbanístico que les había tocado en suerte. Sin haber tenido la opción de aceptar o declinar, todos lo que fueron transferidos a Potrero Grande debieron firmar una deuda a quince años, con un interés del sesenta por ciento “por una casa con cuatro de frente por cuatro de fondo.” (Ibíd.) Sobra decir que ninguno de los transferidos tenía un empleo formal y que la mayoría eran trabajadores informales con ingresos muy por debajo del salario mínimo.¹⁶

Esta estrategia de estigmatización y encierro fue puesta en marcha durante la alcaldía de Apolinar Salcedo –un oscuro político local que encarnaba a la perfección la banalidad y corrupción de las nuevas elites políticas, y llevó a un punto muy alto la renuncia de las elites locales al control de la seguridad ciudadana, y su doblegamiento ante el Estado central.

Veinte años después, en 2012, Rodrigo Guerrero volvió a ser alcalde de la ciudad. La situación que hemos venido analizando no ha cambiado en lo fundamental. La variación crucial está en el crecimiento acelerado del número de capturas en la ciudad. Cada mes cientos de sospechosos son detenidos y llevados ante las autoridades correspondientes. Descontando la obvia rotación de delincuentes profesionales, impresiona el crecimiento del número de detenidos y su poca efectividad en términos de controlar la actividad criminal y la violencia urbana. El encierro en grandes concentraciones urbanas y en las cárceles para mayores y menores está generando una

¹⁶ Cuando el presidente de la época, y gestor del proyecto, Álvaro Uribe, visitó Potrero Grande le preguntó a la primera mujer que recibió las llaves de su casa: “¿Cuánto quedas debiendo de esta casa?” Y ella le respondió “\$ 5.680.000 y debo pagar \$60.000 mensuales, señor presidente”. “Ánimo que hay que pagar la víspera para poder crecer estos proyectos en Colombia”, le dijo Uribe. (Ibíd. 67) Es difícil pensar en un intercambio que refleje mejor las relaciones entre el poder estatal y las víctimas de sus políticas.

continuidad del encierro para los más pobres que pareciera estar convirtiéndose en la estrategia clave de la nueva política de seguridad.

Salvo esa variación importante, no han cambiado ni sus políticas ni sus métodos científicos. Ha mejorado, sí, la eficiencia y eficacia de la Policía en el logro de objetivos específicos de detección y destrucción de organizaciones criminales de distintos niveles. Pero sus logros evidentes no alcanzan a afectar la reproducción del sistema de violencia y seguridad imperante en Cali.

Conclusión

La estrategia de “dejar morir” sigue siendo dominante, con las variaciones propias de un especialista que toma la seguridad ciudadana y la violencia como parte de su dominio intelectual. Pero ni la dependencia absoluta con respecto al Estado central, ni la elevación de la Policía a único agente estatal a cargo de la seguridad ciudadana, ni la estigmatización y el encierro de los que están sometidos al imperio de la extorsión y a los enfrentamientos entre pandillas han cambiado durante su mandato. Sus discursos podrían haber sido pronunciados por cualquiera de sus antecesores: son intercambiables en contenido y lenguaje. La única diferencia es que el alcalde actual sabe sacar provecho de las variaciones en la tasa de homicidios y en otros delitos.

¿Qué es lo que queda de las ruinas del imperio del narcotráfico? Primero, el Estado y las elites dominantes siguen dejando la seguridad de los caleños al complejo sistema de regulación construido sobre los remanentes del sistema de seguridad de los señores. Es un sistema que usa la violencia letal como la forma fundamental de regulación, incrementa el desorden en las comunas más pobres a través de la extorsión, la protección violenta y el tráfico de drogas, y deja la seguridad de los ciudadanos en manos de bandas organizadas.

Segundo, la incapacidad del Estado y de la sociedad para regular la seguridad de sus ciudadanos. La transferencia de la seguridad ciudadana a las organizaciones de narcotraficantes en los años 1980 se ha sostenido más allá del colapso de su imperio. Con una diferencia fundamental: el nivel de desorden de hoy es mucho mayor que el de la época en que los señores controlaban su propio aparato de seguridad. La multiplicidad de agentes violentos, que usan la extorsión contra los más débiles, y disputan territorios y líneas de narcotráfico a sangre y fuego, y la demanda de servicios criminales realizada por ciudadanos legales y organizaciones ilegales ha incrementado el riesgo de vivir y hacer negocios en la ciudad. Con una perversión adicional: ahora golpea a los más pobres —a los que viven en la ladera o en el oriente de la ciudad.

Quedan un Estado débil, una violencia estable, una ausencia de políticas públicas efectivas en materia de seguridad, una renuncia de elites y políticos a garantizar la seguridad ciudadana, un riesgo creciente para vivir y sobrevivir en la ladera y en el oriente, y una demanda sostenida de servicios criminales. No son efectos del narcotráfico y los narcotraficantes, pero sobre lo que quedaba del sistema de seguridad de los señores, y el vacío político generado por las elites locales, emergió un complejo sistema de violencia que ha terminado pareciendo natural para los caleños.

Referencias

- Arévalo, L. A. & M. P. Guáqueta. 2014. La seguridad en Cali: entre políticas municipales y la degradación del conflicto armado, en Ávila et al., *Violencia urbana: Radiografía de una región*, pp. 111-172.
- Ávila, A., J. Giraldo, J. A. Fortou, E. Dellasoppa, L. Bobea, L. A. Arévalo, M. P. Guáqueta y C. E. Guzmán. 2014. *Violencia urbana: Radiografía de una región*. Bogotá: Aguilar.
- Ávila, A. y B. Pérez. 2011. *Mercados de criminalidad en Bogotá*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris y Taller de Edición.
- Betancourt, D. 1998. *Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos: Valle del Cauca 1890-1997*. Bogotá: Antropos.
- Bordieu, P. 2012. *Sobre o Estado*. São Paulo: Companhia Das Letras.
- Buenaventura, N. 1992. *¿Qué pasó, camarada?* Bogotá: Ediciones Apertura.
- Concha, Alberto, F. Carrión y G. Cobo. 1994. “Programa de Desarrollo, Seguridad y Paz DESEPAZ: Estrategias de la Alcaldía de Cali para enfrentar la inseguridad y la violencia”, en Carrión F. y G. Cobo (eds.) *Ciudad y violencias en América Latina*, Quito, 2 Vols.
- Cuadernos Ciudadanos. 2014. *Potrero Grande: Vidas en busca de la reconciliación*. Cali: Arquidiócesis de Cali.
- Chaparro, C. 2005. *Historia del cartel de Cali: El ajedrecista mueve sus fichas*. Bogotá: Intermedio.
- Entrevista 1. 2014. Entrevista con un antiguo empleado de José Santacruz. Cali: mimeo.
- Entrevista 2. 2015. Entrevista con un antiguo relacionista público de los Rodríguez. Cali: mimeo.
- Foucault, M. 2002. *Defender la sociedad*. México, DF: FCE.
- Gambetta, D. 1993. *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Giraldo, J. C. 2005. *Los Rodríguez Orejuela: El cartel de Cali y sus amigos*. Bogotá: Ediciones Dipon, Ediciones Gato Azul.
- Guzmán, A. 2013. Ciudad y violencia: Cali en el siglo XX, en Loaiza, G. (ed.), *Historia de Cali Siglo XX/Tomo II Política*, 327-373.
- López, A (2008) *El cartel de los sapos*. Bogotá: Planeta.
- López, A (2010) *El cartel de los sapos 2*. Bogotá: Planeta.

Martin, G. 2014. Una revisión anotada de la literatura acerca de los observatorios de violencia en LAC. Documento de insumo, Mimeo.

Nuzzi, G. & C. Antonelli. 2012. *Blood Ties*. London: Pan Books.

Ortiz, H. 2010. *Violencia homicida y su concentración espacial en la ciudad de Cali, 1996-2007*. Universidad del Valle: Tesis de grado en Historia.

Ronderos, M. T. 2014. *Guerras recicladas: Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Bogotá: Aguilar.

Sáenz, J. D. 2013. La elite política y sus decisiones sobre la espacialidad en Cali de 1958 a 1998, en: Loaiza, G. (ed.), *Historia de Cali Siglo XX/Tomo II Política*, 297-326.

Vallejo, F. 2000. La conformación del aparato de seguridad de los Rodríguez, manuscrito inédito.

Vivas, D., M. Mosquera, R. Pérez y A. Torres. 2014. Escombros de un imperio: las réplicas del narcotráfico en Cali. Universidad del Valle: Proyecto radial en tres capítulos.

Wacquant, L., T. Slater & V. Borges Pereira. 2014. Territorial stigmatization in action, *Environment and Planning A*, 46: 000-000.

Wacquant, L. 2002. Deadly Symbiosis: Rethinking race and imprisonment in twenty-first America, *Boston Review*, April-May.

Wacquant, L. 2000. *Las cárceles de la miseria*. Buenos Aires: Manantial.

CIDSE

ÚLTIMOS DOCUMENTOS DE TRABAJO

Leonardo Raffo López. Law enforcement and drug trafficking networks: a simple model. Documento de Trabajo No. 162. Mayo de 2015.

Alejandra Rico Mavisoy ¿Cómo se garantizan las capacidades para la empleabilidad? Una mirada a los beneficios del Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleado FONEDE (2009-2012). Documento de Trabajo No. 161. Marzo de 2015

Carlos Humberto Ortiz Quevedo, Diana Marcela Jiménez Restrepo. El crecimiento económico y el poder adquisitivo en Colombia. Documento de trabajo No. 160. Febrero de 2015.

Jorge Hernández Lara. Negociaciones de paz en 2014: avances inéditos en medio de la desconfianza y el escepticismo -informe de seguimiento-. Documento de Trabajo No 159. Febrero de 2015

Cristina Echeverry Rivera. Acompañamiento familiar de la estrategia Red Unidos para la Superación de la Pobreza Extrema. Experiencias de dos familias del municipio de Dagua, Valle. 2009 – 2013. Octubre de 2014. Documento de trabajo No. 158. Octubre 2014.

María Eugenia Ibarra Melo. Las mujeres en la minería. Estado del arte y posibles líneas de investigación. Documento de Trabajo No. 157. agosto 2014.

Sandra Patricia Martínez B. Dimensiones locales y culturales de la formación del Estado: aportes desde las ciencias sociales colombianas. Documento de Trabajo No. 156. julio 2014.

Carlos Humberto Ortiz, Juan David Salazar. Brasil como horizonte: mayor ingreso y mayor crecimiento económico para Colombia. Documento de Trabajo No. 155. febrero 2014.

Rosa Emilia Bermudez Rico, Catherine Muñoz Saavedra. El stock de inmigrantes calificados colombianos en Estados Unidos The American Community Survey: una fuente de información para su caracterización. Documento de Trabajo No. 154. Noviembre 2013.

Carlos Mejía. Karl Marx y Max Weber: ¿ruptura o continuidad?. Documento de Trabajo No. 153. Octubre de 2013.

Francisco Adolfo García Jerez; María Del Pilar Peralta Ardila. Urbanizaciones multifamiliares cerradas y su conexión con el espacio público en la ciudad de Cali: una propuesta metodológica para el análisis de los encerramientos urbanos. Documento de Trabajo No. 152. Agosto de 2013.

Pedro Quintín Quilez; Ximena Sabogal. Los vínculos del ahorro y de la deuda: la economía hablada en la ladera de Cali. Documento de Trabajo No. 151. Agosto de 2013.

Jorge Mario Uribe Gil. Testing for multiple bubbles with daily data. Documento de Trabajo No. 150. Julio de 2013.

Diana Marcela Jiménez Restrepo. Desempleo: definiciones y algunas estadísticas para las trece principales áreas metropolitanas de Colombia (segundos trimestres de 2010, 2011 y 2012). Documento de Trabajo No. 149. Julio de 2013.